

REF.: EF-66-20

NUE.: 04756-20-CVEF-2CM1

JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL Y DE LO MERCANTIL (1), San Salvador, a las diez horas con catorce minutos del día seis de enero de dos mil veintiuno.

Por recibido escrito presentado por la abogada **KELLY ZAMAIRA RODRÍGUEZ ORTIZ** de generales conocidas en el presente proceso, junto con: Publicación del diario oficial de dos folios útiles, mediante el cual pretende evacuar prevenciones realizadas por este tribunal, mediante auto de las diez horas del día veintiocho de octubre del año dos mil veinte.

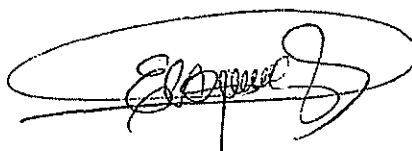
Antecedente.

El presente de ejecución forzosa marcado con la referencia **EF-66-20**, ha sido iniciado por el **INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA**, a través de su representante procesal abogada **KELLY ZAMAIRA RODRÍGUEZ ORTIZ**, en contra del **MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PÚBLICA**, en cuanto al acto administrativo, emitido por la Instituto a las catorce horas con catorce minutos del día once de octubre de dos mil diecinueve en el expediente administrativo identificado con la referencia de esa institución **7-FR-2019**, en la cual se le ordenó al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública que a través de su oficial de información, entregara a una ciudadana una información y además se le ordenó en la misma resolución al Ministro de Justicia y Seguridad Pública que, al finalizar el plazo conferido para proporcionar la información, informara sobre el cumplimiento de lo ordenado.

Motivación.

Sobre el contenido del escrito en estudio, se examina por este tribunal que, la tercera prevención realizada en auto de las diez horas del día veintiocho de octubre del año dos mil veinte consistía en: *"Considerando que el Art. 570 Inc. 1° del CPCM, establece las formalidades que debe contener la solicitud de ejecución, y en relación al Art. 218 Inc. 2° del CPCM, deberá consignar en la parte petitoria de su solicitud LA PETICIÓN CONCRETA DE DESPACHO DE EJECUCIÓN en los términos por los cuales fue condenado el ejecutado, en la resolución final correspondiente, dado que ha sido omitido en el petitorio de su solicitud, lo anterior de conformidad a lo regulado en los Arts. 570, 575 Inc. 2° del CPCM en relación con el Art. 608 Inc. 1° del CPCM."*

Ante esto, la abogada **RODRÍGUEZ ORTIZ**, pretende evacuar la citada prevención, estableciendo que: *"III) Petición concreta del despacho de ejecución. Este Instituto, solicita las providencias del juez necesarias siguientes para el cumplimiento de dichas obligaciones:*



1. Librar oficio al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, para que a través de su titular en el plazo de tres días hábiles contados a partir de la notificación del correspondiente oficio, entregue a este Instituto y a la ciudadana [REDACTED] la información siguiente: "Memorando de cooperación (Memorandum of cooperation-MOC) sobre seguridad fronteriza en Centroamérica, suscrito entre el gobierno de El Salvador y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (Homeland Security) de los Estados Unidos Kiirstjen M. Nielsen, que se hizo público el 28 de marzo de 2019". 2. Librar oficio al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, para que a través de su titular en el plazo de 24 horas posteriores al vencimiento de los plazos anteriores, remita a este Instituto un informe de cumplimiento de la obligación contenida en la letra b) de la parte resolutive del título de ejecución".

Como se desprende de la mera lectura de la "evacuación" relacionada, la abogada **RODRÍGUEZ ORTIZ**, se limita a indicarle a este tribunal mecanismos que sugiere sean adoptados a efecto de, según ella, ejecutar forzosamente el acto administrativo del cual se pretende ejecución, más no indica de manera precisa cuál es su petición concreta de su despacho de ejecución, lo cual es necesario de conformidad con el Principio de Congruencia regulado en el Art. 218 Inc. 2° del CPCM, en el sentido que, tal como se explicó en la motivación de la presente prevención, la procuradora debía exponer en el petitorio de su solicitud los términos por los cuales fue condenado el ejecutado, en la resolución final correspondiente, lo cual no se ha hecho. Por lo que no se ha evacuado con la presente prevención.

Empero, en cuanto al acto administrativo del cual se pretende la ejecución forzosa en este momento, se considera por esta juzgadora que, con la entrada en vigencia de la nueva Ley de Procedimientos Administrativos y la nueva Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, exista confusión de parte de la ciudadanía en cuanto a los alcances de la legislación y las competencias de los tribunales que de alguna manera deberán controlar ese marco legal. Por tal razón, esta sede judicial, manteniendo la imparcialidad característica de este órgano del Estado, aclarará de manera formativa algunos conceptos, de los cuales se observa existen inconsistencias en el escrito en estudio.

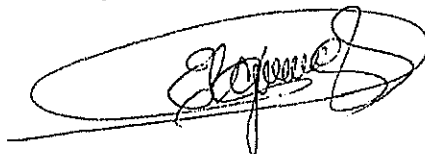
Siendo este, se tiene que, el Art. 570 CPCM citado en la prevención en análisis, establece cuales son los requisitos que debe contener de manera formal, la solicitud de ejecución forzosa, desprendiéndose cuatro elementos, siendo estos: 1. La identificación suficiente de la persona contra la que se pretende la ejecución; 2. El título de ejecución en que se funde la petición; 3. Lo que se busque obtener; y 4. Las acciones ejecutivas que se solicitan.

En cuanto al título de ejecución debe aclararse que, de conformidad con lo establecido en el Art. 554 CPCM se regula el catálogo de títulos de ejecución que pueden tramitarse por esta vía, el mismo Artículo en el numeral 6 se establece que no se trata de una lista taxativa, sino que existirán otros títulos que la Ley les reconocerá como títulos de ejecución, lo cual ocurre con el Art. 32 letra "A" y "B" LPA, en el cual se establece que, un acto administrativo de carácter definitivo podría ser objeto de ejecución forzosa en esta jurisdicción. Siempre y cuando se refiera a : 1. La Ejecución sobre el patrimonio del administrado cuando se trate de un crédito o multa a favor de la administración; y 2. Ejecución por Adjudicación Forzosa, cuando se trate de la entrega de cosa determinada.

Para el caso en concreto se advierte que, el INSTITUTO DE ACCESO DE INFORMACIÓN PÚBLICA pretende mediante este proceso, ejecutar forzosamente una resolución mediante la cual ordena al MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PÚBLICA entregar una información a una administrada y además sobre la emisión del respectivo de informe de cumplimiento que debe emitir el titular de esa administración. Acto administrativo que, tal como arguye la abogada RODRÍGUEZ ORTIZ, ha sido emitido en las facultades del Instituto, como entidad encargada de velar por el cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública (Art. 51 LAIP).

Delimitado lo anterior, se debe considerar además que, existe diferencia entre función judicial y función administrativa, iniciando por que, el Órgano del Estado facultado para Juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, es el Órgano Judicial conformado por las diferentes jurisdicciones establecidas por la constitución y demás leyes, en la libertad configurativa del legislador. De ahí que, la Función Judicial consiste principalmente en Juzgar en casos de conflictos jurídicos suscitados entre dos o más partes y que una vez dirimido el conflicto, esa decisión adoptada debe hacerse cumplir aun en contra de la voluntad de las partes, por este mismo órgano. Por otra parte, con la Administración Pública, hacemos alusión a una institución "la cosa Pública", conformada por todas aquellas instituciones de carácter público e incluso en ciertos casos de naturaleza privada que se encargan de administrar bienes de uso común, con el fin de alcanzar el bien común, véase entonces que, no solo el ejecutivo es la administración pública, como erradamente puede creerse, ya que su Función elemental consiste en la administrativa.

Como segundo punto, las instituciones antes citadas (Órgano Judicial y Administración Pública) se expresan de diferente manera, por cuanto, los Tribunal en el ejercicio de la función jurisdiccional lo hacen de manera ordinaria a través de Sentencias. Por su parte, la Administración Pública, que como ya se dijo no es privativa al Órgano Ejecutivo, pues incluso el Órgano Judicial tiene facultades administrativas, lo que se hace a



través de "Actos Administrativos", definidos por la Ley de Procedimientos Administrativos en el Art. 21, como: "[...] *toda declaración unilateral de voluntad, de juicio, conocimiento o de deseo, productora de efectos jurídicos, dictada por la Administración Pública en ejercicio de una potestad Administrativa [...]*".

En ese orden, como ya se dijo en párrafos anteriores, corresponde a la Función Judicial la Facultad de Juzgar y hacer ejecutar lo Juzgado (Art. 172 Cn), lo cual quiere decir que las providencias judiciales serán ejecutadas por el mismo Órgano Jurisdiccional. Por su parte, los Actos Administrativos, con la entrada en Vigencia de la Ley de Procedimientos Administrativos, se faculta a la misma Administración para ejecutarlos por sí misma, de conformidad con lo establecido en el Art. 31 de ese cuerpo legal, es decir que la Administración Pública, tiene entonces, la facultad de ejecutar por sí los actos administrativos dictados por ella misma, salvo los casos que por disposición de esa misma ley, deba acudir a un proceso judicial.

Como ya se dijo, el Art. 32 letra "A" LPA, establece que los medios de ejecución de los actos administrativos que impongan obligaciones a los administrados serán: "*Ejecución sobre el patrimonio del administrado, cuando se trate de un crédito líquido o multa a favor de la Administración, lo cual se hará siguiendo el trámite para la ejecución forzosa previsto en el Código Procesal Civil y Mercantil. Para este efecto será título de ejecución la certificación del acto expedido por el funcionario competente [...]*" (Salvo es de este Tribunal). Véase entonces que, la Ley exige que, cuando la administración pública pretenda ejecutar forzosamente aquellos actos administrativos que determinen multas o créditos líquidos deberán acudir ineludiblemente ante los Tribunales Civiles y Mercantiles. O en su caso, cuando se trate de una Adjudicación Forzosa, referida específicamente para aquellos casos de Adjudicación Pública regulados en la LACAP, cuando el Contratante adjudicado no ha cumplido con sus responsabilidades contractuales y por ende se habilita esta vía para exigir forzosamente ese cumplimiento y no como erradamente ha indicado la abogada **RODRÍGUEZ ORTIZ**, quien mediante una interpretación de manera exorbitante de la norma pretende encajar el Acto administrativo del cual pretende ejecución, en esta causal.

Dicha interpretación no puede ser posible pues por su esencia son incompatibles, por cual la Adjudicación Forzosa se refiere a exigir el cumplimiento de una obligación de dar deviniente de un contrato público. El acto administrativo en estudio se refiere a una obligación de hacer la cual, de conformidad con lo establecido en el Art. 30 y 31 de la LAP deben ser ejecutadas por la misma administración que lo emito a través del procedimiento administrativo correspondiente aplicando los mecanismos coercitivos necesarios.

Se debe acotar entonces que, tal como se ha dicho, la labor judicial debe ejercerse por sus funcionarios de manera imparcial en todo momento, aun y cuando se trate de la Administración Pública quien actué como impetrante. Siendo esto, en un primer momento, al examinarse los requisitos de forma en el escrito de solicitud, esta juzgadora advirtió que lo que se pretendía ejecutar por esta vía era un acto administrativo dictado en contra de una administración pública, por otro órgano perteneciente a la Administración Pública en su facultad de auto tutela, lo cual no encaja en lo regulado en la Letra "B" del Art. 32 LPA.

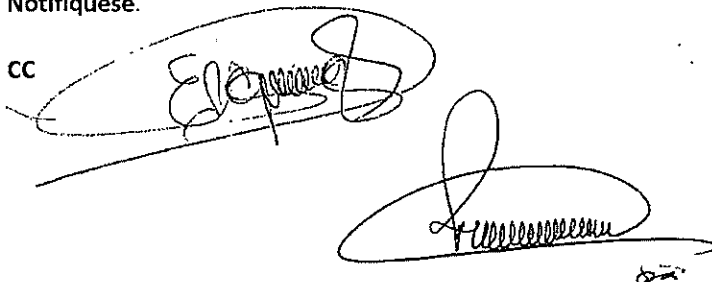
Como corolario de lo antes analizado, se tiene que, si bien la nueva jurisdicción contenciosa administrativa ha ampliado el catálogo de los títulos que son ejecutables por la vía de la Ejecución Forzosa en sede Civil y Mercantil, la Ley ha sido categórica en determinar cuáles actos administrativos podrán habilitar la vía. Por lo que, no puede pretenderse hacer *ejercicio de esa facultad incluso sobre aquellas facultades que expresamente deben ser ejecutadas por la misma administración en su facultad de Policía*. Por lo que, se deberá rechazar la presente solicitud de ejecución forzosa y así se proveerá.


Por tanto, con base en lo antes analizado disposiciones legales citadas y los Art. 11, 12, 18 172 Cn, 554, 560, 570, 574 y 575 CPCM **Resuelvo:**

- I. **Incorpórese** a su antecedente escrito presentado por parte de la la abogada **KELLY ZAMAIRA RODRÍGUEZ ORTIZ**, junto con la documentación anexa.
- II. **Recházase** la solicitud de Ejecución Forzosa interpuesta por el **INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA**, a través de su representante procesal abogada **KELLY ZAMAIRA RODRÍGUEZ ORTIZ**, en contra del **MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PUBLICA**, por adolecer de falta del presupuesto esencial de la idoneidad del Título de Ejecución.
- III. **Devuélvase** la documentación presentada a la parte solicitante, dejándose copia certificada en el presente expediente judicial.
- IV. **Archívese** el presente expediente judicial, al vencimiento del plazo de ley, en caso que la parte interesada no hiciera uso los medios impugnativos con los que cuenta.

Notifíquese.

cc





2

7

1

1

1